

potencias emergentes formalizan

NUEVO ORDEN MUNDIAL



SUMARIO

Internacional

03

Desorden Mundial, Reacomodos Geopolíticos y la Urgencia de la Subversión Popular	03
Fascismo en auge	07
Guerras	10
La transición hacia un escenario multipolar y las ambiciones de hegemonía	11
La guerra económica y las políticas de contención a China	13

15

América Latina en el tablero de juego global

Coyuntura colombiana	22
La amarga realidad	22
Las reformas: ¡que esperen!	24
Pataleos electorales Vs acciones políticas	25
Tendencias y escenarios	31



INTERNACIONAL

Desorden Mundial, Reacomodos Geopolíticos y la Urgencia de la Subversión Popular

Pasados los primeros meses del retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el tablero internacional muestra señales inequívocas de descomposición del orden capitalista global y del sistema político que lo acompañó más de 200 años, basado en los Estados Nación, la democracia liberal occidental y las relaciones imperialistas entre regiones.

Esta crisis de hegemonía se da en el marco de una onda larga de crisis general del capitalismo, que lo imposibilita para recuperar la tasa de ganancia; crisis que se profundizó a finales de los 90s y se aceleró en el 2008. Asistimos entonces al declive generalizado y estructural del sistema capitalista a nivel global. Sin embargo, la muerte del capital está siendo muy violenta, desatando guerras, generando destrucción de la naturaleza y la clase trabajadora, abriendo nuevos campos





de acumulación basados en la máxima explotación, como son la transición energética, el nuevo régimen alimentario y los procesos de la revolución digital productiva.

Lejos de la retórica que enmascara su agresividad imperial en nombre de la democracia y los derechos humanos, la administración Trump ha desplegado una política exterior abiertamente confrontativa, tanto en términos económicos como militares, anunciando políticas de sometimiento contra todo el mundo, buscando que Estados Unidos vuelva a tener la hegemonía mundial absoluta. Sin embargo, su regreso ha acelerado la crisis sistémica global: ante la evidencia de que Estados Unidos ya no lidera un mundo unipolar, sigue decidido a incendiar el planeta para evitar su caída definitiva y para ello usa a sus socios principales: Israel, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur.



Las agresivas políticas de Trump combinan el ataque y el desconocimiento del sistema global multilateral, el cual se presenta totalmente inútil para regular el comercio, los conflictos diplomáticos y las guerras. Al mismo tiempo se empieza a implementar un modelo neoproteccionista que busca repatriar empresas para fortalecer el empleo blanco norteamericano, expulsa a los migrantes y restringe el gasto social en investigación, vivienda, educación y salud. Culturalmente, Trump lanza una campaña contra el sistema educativo público y privado, y contra las políticas de inclusión desarrolladas en los últimos gobiernos demócratas. Con estas medidas, Trump se perfila como un operador del fascismo en ascenso, política e ideología para salir de la crisis ya ensayada por el capital en el siglo pasado.

Mientras desde la Casa Blanca se busca reorganizar la influencia global, es evidente que se ha consolidado una alianza estratégica que desafía el orden hegemónico y el liderazgo de los EE.UU.: China, Irán y Rusia articulan un frente de intereses comunes en Eurasia y Medio Oriente, desplazando a Washington en territorios donde antes operaba con total impunidad. Esta alianza se traduce en cooperación energética, tecnológica, militar y diplomática, con avances significativos en las rutas comerciales, los acuerdos bilaterales entre países clave y una narrativa multipolar que gana legitimidad ante el desprestigio occidental.

La guerra arancelaria decretada por Trump ha sido contestada de forma contundente por China, quien aparece ahora como país defensor de la globalización y el libre comercio. Después de la confrontación en la imposición de aranceles China y EE.UU. vuelven a las negociaciones. Sin embargo, no hay respuestas similares en el resto de los países y Trump empieza a consolidar un escenario de comercio regulado, restrictivo e inequitativo.





El genocidio en Palestina ha sido un punto de inflexión ético, simbólico y político. La masacre permanente contra el pueblo palestino, sostenida por el Estado sionista de Israel, con el respaldo explícito de Washington y Europa, expone el agotamiento de los valores liberales occidentales que alguna vez pretendieron universalidad y profundiza la crisis de credibilidad de la institucionalidad mundial que pretende regular los conflictos.

El Estado sionista no ha renunciado a su añorado proyecto del Gran Israel, lo que implica reconfigurar el Oriente Medio, para ello se ha preparado desde hace años, entendible que en la actual coyuntura, luego de la caída de Siria y las afecciones en el Líbano, lance el golpe contra Irán, quien ha respondido de inmediato a dicha agresión. Esta confrontación coloca en otro nivel de tensión a la región y al mundo con sus respectivas consecuencias.



La transición a una nueva hegemonía y a un orden multipolar también exige de las potencias en ascenso una actuación decidida para frenar el exterminio de los pueblos y superar el neocolonialismo. África y el Oriente Medio se convierten en los escenarios más candentes donde las visiones enfrentadas de mundo y humanidad entran en juego.

La humanidad requiere de nuevas narrativas revolucionarias, que logren superar la crisis del socialismo y se plantea como alternativa a la extinción y la barbarie que amenaza a la humanidad y al planeta.

Fascismo en auge

Los momentos de profundización de las crisis y las violentas transiciones a las que asistimos, permiten el afloramiento de alternativas en todo el espectro ideológico, cultural y político. Así, vemos como vuelve a surgir el fascismo, implicando una ruptura estructural del contrato social que alguna vez fundamentó la legitimidad del Estado moderno.

La promesa de derechos, bienestar y representación queda relegada frente al auge de un autoritarismo socialmente aceptado y promovido desde las élites. Las políticas abiertamente anti migrantes, el aumento sostenido del gasto militar, la persecución a organizaciones sociales y la criminalización de la disidencia cultural e ideológica, son síntomas de este nuevo orden que se impone sin necesidad de declarar la guerra mundial. Se trata de un proyecto cultural profundamente regresivo, que mezcla dinámicas neoconservadoras, neocoloniales y una ofensiva religiosa que, en América Latina, encuentra su punta de lanza en el evangelismo reaccionario, financiado por intereses transnacionales.





Papel central en esta contrarrevolución preventiva ocupan los grandes medios de comunicación, controlados por conglomerados empresariales que operan como aparatos ideológicos del poder, instalando un sentido común basado en el miedo, la desinformación y la sospecha. Esta maquinaria mediática deslegitima cualquier intento de reforma estructural, promueve el statu quo y demoniza toda narrativa emancipadora, mientras articula una transformación cultural de largo alcance que pone en riesgo el presente y el futuro de las sociedades. Está en juego no es solo la política, sino la capacidad misma de imaginar un mundo distinto.

Este fascismo contemporáneo no camina solo: avanza de la mano de un tecno-fascismo sofisticado, que combina el poder militar, el control digital y la vigilancia algorítmica con una arquitectura jurídica y mediática diseñada para anular el



pensamiento crítico y vaciar de contenido la democracia. A ello se suman lógicas neo feudales, donde la concentración extrema de la riqueza produce nuevas castas globales desligadas de toda responsabilidad social, mientras millones quedan atrapados en sistemas de servidumbre moderna. El uso de plataformas, inteligencia artificial y tecnologías de control no solo vigila y censura, sino que también administra emociones, deseos y comportamientos, perfeccionando un modelo de dominación que no requiere represión directa para funcionar.

El sistema capitalista global se reorganiza para seguir acumulando capital a costa de ampliar confrontaciones, destruir comunidades y cancelar derechos fundamentales. Se impone una gobernanza del miedo, una economía de guerra permanente, y un orden post-democrático que se disfraza de eficiencia mientras aplasta toda posibilidad de soberanía popular o justicia social. La ofensiva es clara: controlar territorios, cuerpos y conciencias, desde la selva amazónica hasta los centros urbanos hipervigilados, blindando privilegios y perpetuando desigualdades históricas bajo nuevas formas.

En este contexto, el llamado "orden internacional basado en reglas" se desploma bajo el peso de su propia hipocresía, mientras pueblos enteros resisten con dignidad la barbarie neo-colonial. Las guerras de independencia africanas del siglo XXI, aunque parezca increíble, son luchas por independencia. El retorno de los procesos de descolonización, como los que adelantan los países del África subsahariana o del Sahel y otros —aunque fragmentarios— avanzan de la mano de un repunte de una conciencia crítica global que reafirman que ya no estamos ante una lucha entre Estados, sino entre proyectos de civilización, entre proyectos de vida y proyectos de muerte.





E Kopel

Guerras

La guerra, con claros intereses geopolíticos y geoeconómicos se extiende por todo el mundo. En Ucrania no solo hay una disputa territorial o geopolítica, sino que se ha convertido en una guerra proxy que simboliza el enfrentamiento entre bloques civilizatorios. Aunque las narrativas occidentales buscan ocultar el estancamiento militar y el colapso económico de Kiev, la realidad muestra que el conflicto ha servido para desgastar la economía europea, fracturar la OTAN desde adentro y reconfigurar el mapa de las confrontaciones y las alianzas globales.

Sinduda, el fortalecimiento de los BRICS+, con la incorporación de países estratégicos como Irán, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia como países miembros y otros 10 países asociados, representa una



arquitectura alternativa en ciernes, que desafía el sistema financiero, la banca occidental y profundiza la crisis del dólar.

En respuesta, Estados Unidos intensifica su ofensiva en Asia-Pacífico, desplazando su aparato bélico hacia el sudeste asiático y ensayando provocaciones con Taiwán y Filipinas, como una forma de contener —a través del caos— el ascenso imparable de China, no solo como potencia económica sino como líder en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la infraestructura digital global. También, reaviva viejos conflictos regionales como el de Cachemira, tratando de enfrentar a los integrantes del BRICS+.

Los BRICS+ tendrán que tomar decisiones sobre si enfrentar militarmente, o no, las agresiones imperialistas-sionistas, y esta decisión puede ser definitiva en la consolidación del bloque o su descomposición.

La guerra tecnológica es el nuevo terreno de disputa hegemónica, y Pekín ha demostrado capacidad para no solo competir, sino liderar, redefiniendo los términos del poder global.

La transición hacia un escenario multipolar y las ambiciones de hegemonía

Desde principios del siglo XXI, el sistema internacional se ha desplazado gradualmente hacia un escenario multipolar, marcado por el ascenso de China como potencia económica y estratégica, y la “revitalización” de la Unión Europea y otros actores regionales. Sin embargo, la reafirmación de la supremacía estadounidense sigue siendo un elemento central, especialmente en América Latina, donde Estados Unidos intenta mantener su influencia a través de mecanismos de control político, económico y militar.





Estados Unidos, con una estrategia centrada en preservar su predominio en el sistema global, ha desplegado acciones que van desde la imposición de aranceles y sanciones hasta la instalación de bases militares y la manipulación de informes e instituciones financieras internacionales, con el fin de contener el crecimiento de China. Paralelamente, ha fortalecido su alianza con países dependientes y ha promovido políticas de dependencia del dólar, que funcionan como mecanismos de dominación financiera y económica.

La plutocracia que gobierna a Estados Unidos, pretende arrodillar el mundo a sus intereses y desconocer los derechos de los estadounidenses, ganados en sus luchas a lo largo de su historia. Las medidas de Trump traen aparejada un extendida crisis social, que empieza a tener la válvula de escape en los levantamientos sociales de los migrantes contra las redadas y la expulsión. Se agudiza así la lucha de clases y las movilizaciones y protestas, algunas bastante beligerantes, se multiplican.

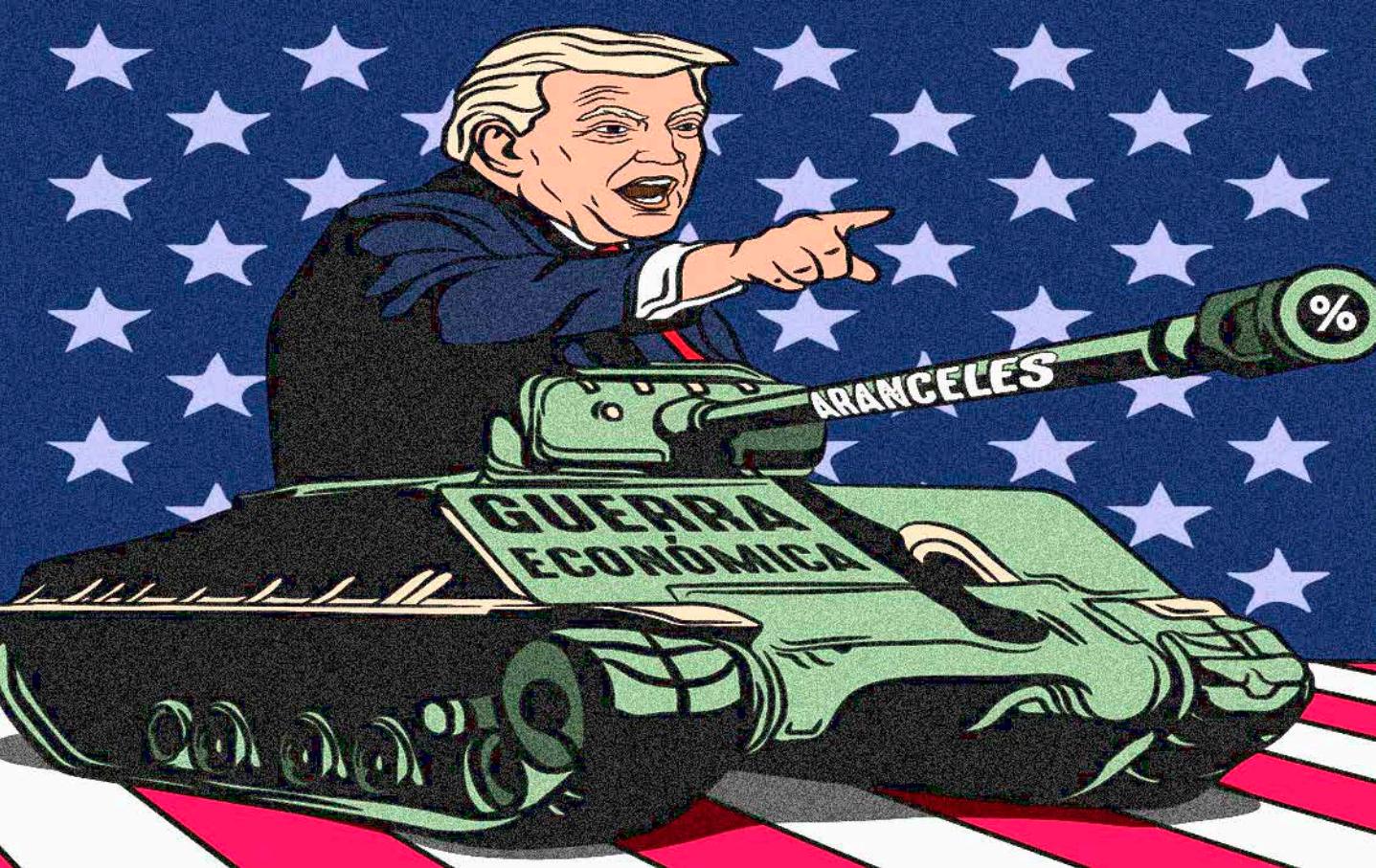


La guerra económica y las políticas de contención a China

En el marco de la competencia multipolar, la guerra económica emerge como uno de los principales instrumentos en la lucha por la hegemonía mundial. La administración de Donald Trump intensificó estas acciones mediante la aplicación de aranceles, sanciones y campañas mediáticas contra China, pero también contra la gran mayoría de los países, incluso contra sus tradicionales socios en Europa, Asia y en el resto de regiones. Sólo China tuvo la capacidad de responder con medidas recíprocas, hasta obligar a Trump a volver a bajar los aranceles a términos competitivos.

El desenlace de esta guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo es incierto, pues arrastra los factores de crisis estructural de todo su sistema económico, por su desindustrialización, el rezago tecnológico, la baja productividad, al déficit comercial crónico por obligar que el dólar se convirtiera en la divisa mundial y al estar emitiendo billetes sin ningún respaldo productivo, generando un país parásito que vive de la riqueza de los demás países. Los aranceles alocados de Trump no solucionan ninguno de estos problemas, sino que los agudiza y trae nuevos problemas para la maltrecha economía gringa, como la crisis bursátil, la quiebra de los pequeños y medianos productores y comerciantes y un acelerado proceso inflacionario, dado que los nuevos aranceles los pagan los consumidores estadounidenses. Además, las grandes transnacionales que producen en Asia, no van a regresar a Estados Unidos, pues los altos costos productivos, multiplicarían los precios de sus productos, haciéndolos invendibles. Por el momento, Trump acelera todos los factores que están llevando a Estados Unidos hacia una recesión económica, con graves consecuencias mundiales.





China también ha respondido con acciones estratégicas, fortaleciendo su presencia en la región a través de inversiones, cooperación en infraestructura y acuerdos comerciales, particularmente a partir de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la cual ha involucrado a más de veinte países latinoamericanos y nuevos acuerdos económicos con la CELAC. La expansión china ha desplazado paulatinamente la influencia de Estados Unidos, acumulando una participación en el comercio internacional regional del 3,7% en 2001, para alcanzar el 16% en 2020, desplazando a Estados Unidos como principal socio comercial en numerosos países.

La pugna se ha traducido en una serie de medidas imperialistas por parte de Washington, como la pretensión de anexar Panamá, Groenlandia y Canadá. Todo ello son intentos por detener el avance chino en el continente.





AMÉRICA LATINA EN EL TABLERO DE JUEGO GLOBAL

La región latinoamericana, por su ubicación geoestratégica y sus recursos naturales, se ha convertido en un escenario de confrontación directa entre las grandes potencias. La estrategia estadounidense ha estado centrada en frenar el ascenso chino mediante políticas de presión económica y militar, promoviendo además la dependencia del dólar y reforzando alianzas con gobiernos alineados a sus intereses.

No obstante, China ha logrado consolidar una presencia significativa en la región, ofreciendo alternativas de inversión y cooperación que son más favorables que el modelo tradicional, con propuestas en infraestructura, financiamiento y acuerdos políticos con gobiernos que buscan autonomía respecto a Washington. Este fenómeno ha generado tensiones, poniendo en evidencia la disputa por el control de recursos estratégicos, mercados, y modelos de integración regional.





Las políticas de Estados Unidos buscan mantener su influencia mediante la imposición de sanciones, el uso de bases militares y mecanismos de control financiero, con acciones que evidencian una estrategia de desplazamiento frente a la expansión china en la región.

En América Latina, este reordenamiento global no ha sido acompañado en el continente, por una estrategia regional sólida. La región aparece fragmentada, sometida, sin capacidad de interlocución autónoma. La "criminalidad transnacional", ese espectro que Estados Unidos invoca como excusa para militarizar el continente, sirve como coartada para profundizar la injerencia, intervenir soberanías y garantizar el control de recursos estratégicos.



El caso de El Salvador, con Nayib Bukele como administrador local de un modelo de control social y económico perfectamente alineado con los intereses de Washington, muestra un presidente que se vuelve el carcelero de los gringos, representando un laboratorio autoritario que combina represión, vigilancia masiva y marketing político. Pero no es un caso aislado: se trata de una estrategia regional más amplia que reconfigura el papel de América Latina como zona de subordinación geopolítica y recurso estratégico en el marco del nuevo desorden mundial. En esta lógica de recolonización encubierta, otros países replican esta fórmula con variaciones propias.

En Perú, el ingreso reciente de tropas estadounidenses bajo el pretexto de cooperación militar evidencia la pérdida de soberanía y el alineamiento directo con la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos. La crisis política permanente, la represión contra comunidades indígenas y campesinas, y la imposición de un modelo extractivista violento, hacen del Perú una pieza clave en el rediseño militarizado de los Andes. La Amazonía y el acceso al Pacífico sur se vuelven prioritarios en la nueva cartografía del control.

Ecuador ha sido un laboratorio para la retoma y control imperialista. La derecha ecuatoriana, bajo supervisión de los EE.UU., aplicó un plan de desestabilización con el uso de bandas del narcotráfico, que justificó la presencia física de los militares y agentes gringos. La derecha servil le entrega el país al capital y al imperio.

Chile, por su parte, ha reforzado su papel como enclave de entrenamiento militar regional, avalado por acuerdos con el Pentágono, mientras endurece su política interna contra los pueblos que defienden el territorio, especialmente el pueblo Mapuche. La represión sistemática, el discurso criminalizador y el fortalecimiento del aparato de seguridad convierten al Estado chileno en un eslabón fundamental del eje represivo sudamericano, disfrazado de institucionalidad democrática.





En Argentina, el gobierno de Javier Milei no solo ha entregado soberanía económica al Fondo Monetario Internacional, sino también territorio y recursos estratégicos. La cesión de bases militares, el interés norteamericano por zonas ricas en litio y la militarización del sur del país, se complementan con una política interna que desmonta derechos sociales, desfinancia la educación y reprime toda forma de protesta. Un proceso de recolonización explícito, bajo la narrativa del “orden” y el “mercado”.

El caso de Haití ilustra otra dimensión del control: el caos administrado como forma de dominación. La inestabilidad estructural del país, combinada con el despliegue de fuerzas extranjeras bajo mandatos internacionales ambiguos, sirve a los intereses estratégicos de Washington como plataforma



para el control del Caribe y de rutas marítimas cruciales. Haití, desangrado, se convierte en una advertencia: cuando no se puede imponer el orden desde arriba, se garantiza el desorden controlado.

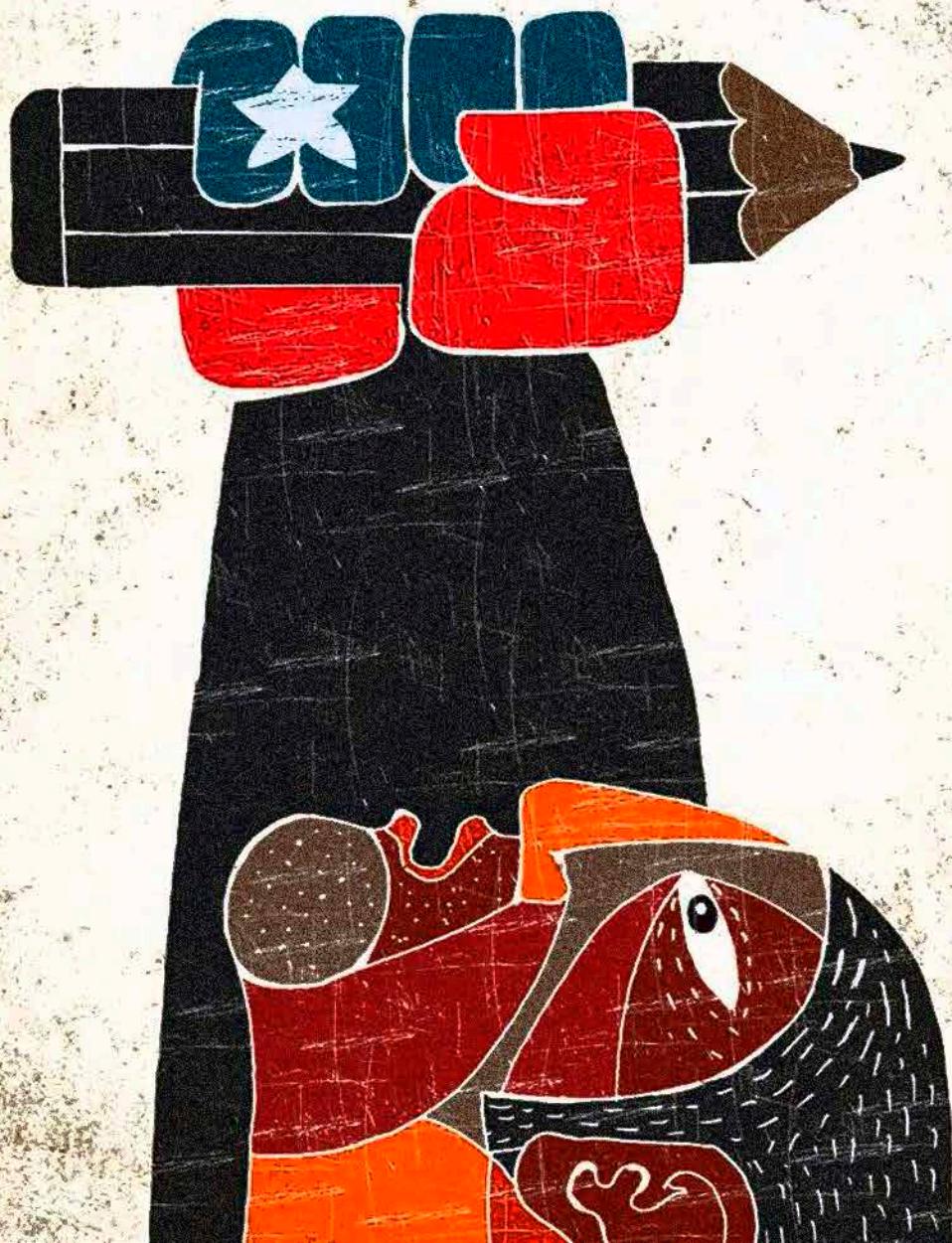
Colombia, a su vez, sigue siendo el bastión militar por excelencia de Estados Unidos en la región. Su papel de gendarme no ha cambiado pese al gobierno progresista. La articulación con la OTAN, la permanencia de bases militares y el anuncio de nuevas como la negociada en la isla Gorgona, el entrenamiento de fuerzas regionales y su rol en operaciones hemisféricas revelan su función estructural en la contención y vigilancia del continente. La paz total, en ese contexto, es la continuidad de la doctrina de Seguridad Nacional del Pentágono, aplicada como guerra contra-insurgente, que legaliza su aparato paramilitar y pretende colocar la rebelión armada como simple delincuencia.

Panamá, con su canal interoceánico cada vez más codiciado, enfrenta presiones crecientes por parte de Estados Unidos para reforzar su política de seguridad en clave ofensiva. La posibilidad de una intervención encubierta o el despliegue de nuevas formas de presencia militar no debe descartarse, especialmente ante la narrativa de EEUU de la creciente presencia (amenaza) china en inversiones portuarias y logísticas. Panamá es un nodo clave en la disputa por el control global del comercio y las rutas estratégicas.

En todos estos casos se repite el mismo patrón: gobiernos funcionales a los intereses norteamericanos entregan soberanía, criminalizan la protesta, reavivan discursos securitarios, aumentan el gasto militar y reducen la inversión social. Mientras las mayorías enfrentan precariedad, hambre y despojo, las élites locales se subordinan a los intereses del Norte global a cambio de estabilidad política y respaldo financiero. La región se militariza, no para defender a sus pueblos, sino para sofocar toda posibilidad de transformación desde abajo. Es la guerra contra los pueblos, en nombre del orden y el progreso.



LA REVOLUCIÓN
NO LA PARA
NADIE



El progresismo latinoamericano, atrapado en su propio laberinto, aparece hoy como una fuerza sin rumbo. Incapaz de romper con los modelos extractivistas y neoliberales, sus gobiernos se tornan administradores de la dependencia, más preocupados por mantener la gobernabilidad macroeconómica que por impulsar transformaciones estructurales reales.

La tan mentada integración regional se ha vaciado de contenido, debilitada por la ausencia de liderazgo estratégico y la fragmentación ideológica.

Frente a este panorama de caos inducido, descomposición institucional, recolonización económica y ofensiva bélica, emerge como urgente y vital el papel de la subversión, la insurgencia y la lucha popular; no en un sentido romántico o nostálgico, sino como ejercicio ético, político y territorial de defensa de la vida.

Las bases de los nuevos levantamientos son las comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, mujeres organizadas, juventudes rebeldes, trabajadores precarizados urbanos y experiencias de autogobierno popular que resisten cotidianamente los embates del capital y sus intermediarios, ya sean progresistas o abiertamente neoliberales.

La defensa de la tierra, el agua, el aire y los territorios se convierte en el centro de una nueva gramática de la lucha: no se trata solo de resistir, sino de reinventar el mundo desde abajo.

Hoy, más que nunca, el enemigo no es solo un imperio decadente o una oligarquía local, sino un modelo civilizatorio que ha hecho de la muerte su proyecto. En ese escenario, la insurgencia popular no es una amenaza al orden; es, con toda su potencia subterránea, la única promesa real de futuro.





COYUNTURA COLOMBIANA

La amarga realidad

Tras casi tres años del “gobierno del cambio”, la sociedad colombiana, anhelante, huérfana de las transformaciones que le prometieron, sigue escuchando más y más disertaciones alucinantes del presidente, pero muy pocas realizaciones concretas. Es un gobierno que despertó muchas ilusiones, destruyéndolas de a poco entre acuerdos burocráticos con la derecha, dejándose arrastrar por la corrupción de gran calado. En situaciones críticas el gobierno de Petro hace llamados a la movilización social, para luego renegociar con la derecha. En el momento actual, entrando en la recta final del ejercicio gubernamental, el presidente vuelve a convocar la constituyente, las movilizaciones y hasta la huelga, pero no solo hay poca credibilidad, sino que es tarde, pues el pulso decidido con la derecha, con amplia beligerante participación popular se debió realizar, con prioridad y desde el primer día por abajo.



La administración progresista ha instrumentalizando a los movimientos sociales, ha mellado su capacidad crítica, su autonomía, así como su vocación anticapitalista. Claro está que, en haber llegado a esta situación, los partidos y movimientos de izquierda tienen una gran responsabilidad, pues acolitan los desvaríos petristas sin crítica, ni resistencia.

El propósito a largo plazo de Petro, y su grupo más cercano, sigue siendo ser parte del régimen, y para ello se maniobra de forma camaleónica e incoherente. Pese a ello, en segmentos no despreciables de la sociedad permanece vigente el deseo de cambio. No es para menos. Las mayorías siguen viviendo del trabajo por cuenta propia; los salarios de quienes están enganchados en alguna empresa no alcanzan para cubrir la canasta básica; el costo de los servicios públicos sigue impagable; la crisis de la salud no da respiro, entre otros problemas estructurales que siguen intactos.

En pocas palabras, el país del 2025 es casi idéntico, en materia de política social, al del 2022. Y es casi el mismo en tanto se han visto algunas realizaciones en el campo -lejos de la reforma agraria prometida-, legalizando predios y regresando a sus propietarios tierras que habían reclamado por años. Hay avances para comunidades afros, raizales, como campesinas, desde siempre marginadas, con beneficio de algún nivel de inversión en sus territorios. Otro tanto sucede con el derecho a la protesta, con reducción de la represión que siempre afectaba, pero también con regulaciones que le quitan beligerancia. En no pocas ocasiones pesa más lo simbólico que lo concreto, pero la idea de un gobierno diferente gana algún aliento entre franjas de la población. Lo denunciado respecto al Ministerio de la Igualdad es lamentable e inexplicable, pues debió ser el ente con más capacidad de formulación de políticas de equidad e inclusión, en un país donde campea la miseria, la discriminación y la exclusión. Sin embargo, este esfuerzo se esfumó entre egos, corrupción e incapacidades de liderazgos sociales amarrados y sin imaginación, que ejercieron mirándose el ombligo.





M Muñoz

Similar ocurrió en inclusión social, cuyo presupuesto, por falta de ejecución, pasó del 2024 al 2025 de 15,1 billones a 10 billones. En el Departamento de Protección Social, también por igual razón, pasó de 10,7 billones a 5,6 billones. ¿Qué decirles a los marginados, que deberían ser los favorecidos por tal gasto, sobre tamaña realidad? La política de inclusión, de esta manera, queda pendiente.

Las reformas: ¡que esperen!

Entre ineficacia, corrupción y acuerdos por arriba, quedan pendientes las anunciadas reformas sociales, factor fundamental para la definición del apoyo de los movimientos sociales, y pueblo no organizado, al gobierno. Para aquellos movimientos tradicionales, especialmente el sindical, de no concretarse las reformas prometidas, de manera previsible el resultado puede ser asumido como su propio fracaso.



Movimientos ligados a la tierra y el territorio, a partir de logros parciales, podrán evaluar que ha habido avances, aunque insuficientes y lejos de las metas prometidas: en este gobierno se han entregado, bajo la consigna de reforma agraria, 580.000 hectáreas de las 3 millones prometidas; indígenas y negros han recibido recursos y tierras y quizás son los más beneficiados de los programas gubernamentales. Pero donde más desilusión hay es en los sectores juveniles urbanos, aquellos que pusieron el pecho y la sangre en el estallido social y para quienes la vida no ha cambiado en nada; ni siquiera se les cumplió cabalmente con justicia y libertad para los más de cien muertos, cientos de mutilados y encarcelados.

Para los movimientos organizados quedan dos opciones: o se dedican al esfuerzo de demostrar que sí hubo reformas “aunquenoquehubiésemosquerido”, o admiten la necesidad de una reconstrucción organizativa y un replanteamiento. El problema está en que los sectores que fueron objeto del fracasado reformismo (por ejemplo, salud) sumaron a la crisis que ya traían los efectos del inescrupuloso sabotaje llevado a cabo por los gremios empresariales. La situación es catastrófica y tiende a aumentar la masiva desesperación.

Pataleos electorales vs acciones políticas

En ese devenir, a pocos meses de iniciar su cuenta regresiva o final de mandato, su año de despedida, hay un inicio apresurado de la campaña electoral por dos vías: por medio de la convocatoria a una consulta popular centrada en la reforma laboral y, aunque menos evidente, por medio de los debates y negociaciones para transformar el Pacto Histórico en partido único -una sumatoria de votos y no programática- para desde ahí sumar hacia un “frente amplio”. En enfoque sigue siendo construir una alianza con la derecha “menos mala”, que al final termina comiéndose la torta gubernamental.





La verdad es que muchos agrupamientos de diferente signo oscilan entre una u otra opción, según sus cálculos electorales. En octubre comenzarán a producirse resultados en esta materia. Para las grandes masas, completamente desorientadas, las decisiones finalmente se darán en torno a las consignas o promesas sintéticas de mayor calado emocional. Las grandes confrontaciones sociales se aplazarán, porque ahora lo prioritario es lo electoral. Esta disyuntiva, que parecía haberse resuelto en los gobiernos del primer ciclo progresista, vuelve a ganar centralidad, pues el progresismo criollo aprendió que los estallidos sociales y las movilizaciones son buenas para cambiar correlaciones de fuerza, pero no para gobernar.

En este final de mandato, el espacio económico con que cuenta el gobierno es casi tan limitado como el heredado al inicio de su administración, y esto sucede porque Petro no introdujo



ningún cambio en materia de política económica. Con una deuda externa acrecentada en los tres años transcurridos, llegó en febrero a US\$201.135 millones y representa 48,03% del PIB. con caída de ingresos por errores en el manejo de la agenda tributaria, así como por la disminución de los precios en sus principales exportaciones -petróleo y ferroñíquel-, una realidad que le cierra espacios y maniata en inversiones de impacto notable. Según cálculos de Acipet, por cada dólar que baja la cotización del crudo se impactan el valor de las exportaciones y la entrada de divisas en una cuantía de US \$16 millones. Es necesario recordar que el presupuesto nacional está calculado sobre la base de un promedio de 74 dólares el barril, por lo que el efecto sobre las finanzas públicas por su caída será grande. La mayor empresa del país, Ecopetrol, se encuentra estrangulada por la corrupción y sus políticas erráticas, bajando la producción de petróleo y gas. Como política gubernamental se disminuyen las reservas probadas de los hidrocarburos, pero no se logran concretar la producción soberana de las energías limpias que sustituyan los combustibles fósiles.

Mientras las finanzas públicas tienen un desbalance por cubrir de 26 billones de pesos, el gobierno prioriza la compra de aviones de guerra, armamento y todo tipo de logística para las Fuerzas Armadas, olvidándose que el cambio sería aumentar la inversión social.

Por el lado del níquel, su precio ha caído desde que se rompió la barrera de los US\$20.000 por tonelada métrica en mayo de 2024, fluctuando en abril entre los 15 y los 16 mil la tonelada métrica, dando otro golpe a las finanzas nacionales.

Hay algunos resultados favorables, para el sector agropecuario, por el lado del café, debido a factores exógenos, que benefician a miles de familias. Un beneficio que sería más notable si quienes están centrados en la siembra del grano contarán con extensiones superiores a la hectárea, dos o tres, tan comunes en los minifundios en los que viven. La reforma agraria evidencia acá la necesidad de concreción





pronta, así como todos los programas que deben acompañarla. El derecho a tener tierra por parte de quienes la trabajan, implica expropiarla, dado que la promesa del presidente de comprar 3 millones de hectáreas de los terratenientes es solo una ilusión, pues no existe el dinero que ello implica.

En esas condiciones, con la carga que le significa el abultado déficit fiscal, que lo lleva a tener que recortar no menos de 12 billones de pesos del PGN, más los compromisos de deuda externa que le obligan a cubrir en el año en curso 121 billones de pesos, 59,4 billones de ellos solo como pago de intereses –una cifra sin precedentes en la historia reciente del país–, todo estará centrado en más promesas, sin realizaciones significativas, las que ahora no interesan, incluso de cara a las elecciones, pues todo el afán se lo lleva los acuerdos, cuotas, componendas (mermelada) y las posibilidades de neutralización de facciones de la oposición.



El gobierno es consciente que tiene las puertas cerradas para concretar otra reforma impositiva o incrementar tributos por alguna otra vía. Queda la opción de más deuda, de suerte que, con el pragmatismo que le caracteriza, trasladará la asfixia fiscal al gobierno que le suceda. Lo cierto es que la crisis resulta insoluble a corto plazo. El efecto que tiene, en lo que resta de la administración, va a ser el desplome de los programas sociales de asistencia y el cierre de los esfuerzos en materia de reforma agraria, de vías y de alternativas energéticas.

Faltando poco para terminar el periodo presidencial, el gobierno ha decidido priorizar la campaña electoral, frente al ejercicio de administrar la cosa pública, ante la incapacidad para mostrar los cambios que prometió. Hoy tiene menos peso el trámite de las reformas en el parlamento, sino que lo importante es mantener al pueblo sensibilizado y movilizado para las próximas elecciones.

¿Qué dirán ante ello sus activistas y bases sociales?, ¿Tendremos posibilidad de retomar el debate sobre los retos históricos de los movimientos sociales?, ¿El debate sobre gobierno y poder? E, incluso, el necesario debate, a la luz de lo arrojado por el progresismo en toda nuestra región, sobre la vigencia, o no, ¿de la revolución? El devenir de lo que está ocurriendo, no solo en Colombia sino en el mundo en general, indica que encarar tal debate es más que indispensable, ya que de lo contrario la vía al regreso de los poderes tradicionales al gobierno -no digamos que al poder y al Estado, que en ningún caso han perdido- estará más que pavimentada.

Favorecen ese escenario tres realidades: crisis del sistema de salud, carestía y precariedad en los servicios públicos y la escalada de inseguridad y violencia en zonas rurales y semirurales. 72 masacres y 89 líderes asesinados en 2024, así como 79 activistas ambientales que perdieron la vida por defender el equilibrio de sus territorios, como lo certifican distintos informes de organismos multilaterales y ONGs., no dejan dudas sobre este particular.





P D' Pablos

En esta cruda realidad, que golpea la vida de la población juega papel importante la decisión de Petro de acunar y patrocinar bandas neoparamilitares salidas de la desmovilización de las Farc. Los asesinatos de la banda de HH en Nariño, de la banda de Richard y el 33 en el Catatumbo y de las bandas de Mordisco y Calarcá en el sur del país, se cuentan ya por cientos, y en una escalada que solo podrá detener el pueblo y sus organizaciones.



Tendencias y escenarios

La derecha y el progresismo ya se metieron de lleno en la campaña electoral, y ese será el eje dinámico de la lucha política, e incluso de la guerra, hasta el próximo año.

Pero, estamos, por tanto, hoy y hacia los próximos años, dominados y sometidos -¿obligados?- a la política como simple ejercicio electoral, un proceder en el cual el pueblo es y seguirá siendo objeto, así afirmen las dirigencias del cambio que ello no es cierto, que el pueblo es el que determina y decide. Un ejercicio de la política en el cual la vocación de poder estará totalmente ausente. Ese es el estilo y proceder de la "nueva" política.

¿Aceptará el pueblo ansioso de cambios, votar por aquel que le señale Petro?, ¿Podrá éste transferir los votos? Aunque se dice una y otra vez que los votos no son endosables, podría ser que funcionara en esa vía, ante la ausencia de una alternativa de la oposición de derecha que despierte, no ilusión de cambio, sino que logre agrupar un sentimiento de rechazo a Petro. Hasta el momento no aparece en el escenario, propuesta o persona que encarne, desde un talante popular una ilusión como la que llevó a Petro al gobierno. Las campañas mediáticas, las operaciones encubiertas, los insultos y agresiones van a ser el pan de cada día en la disputa por llegar a la Casa de Nariño.

En cuanto al escenario de la movilización de calle asistimos a la disputa entre el gobierno y la derecha. El atentado al senador de ultraderecha Miguel Uribe le permitió a la derecha hacerse con las banderas de la seguridad, los derechos humanos y la vida. El gobierno sigue teniendo músculo de movilización, aunque cada vez más restringido a sectores indígenas y sindicales.





S Restrepo

¿Logrará reflotar esta situación la convocatoria a la Consulta Popular, timonazo con el cual Petro logró sacar de la contemplación al activismo fiel a su administración? Un giro, que a su vez, le permite negociar con algunos partidos tradicionales lo poco o mucho que le queda de la burocracia ministerial y de algunas otras instancias de la administración nacional. Negociación que, abre las puertas, al mismo tiempo, a los necesarios acuerdos con proyección a las elecciones que ya se acercan, acuerdos que de no afinarlos de la mejor manera para que sumen fuerzas en la concreción positiva de la Consulta Popular, lo pueden llevar a quedar en pésimas condiciones para reclamar apoyo del voto popular para Congreso y Presidencia.



Con la Consulta el Presidente logra reactivar al activismo y lanzarlo a la acción, todo ello con propósito electoral: volver movilizados a los territorios, organizar estructuras de base en toda parte donde se abra la oportunidad, recuperar la confianza en el gobierno del cambio, culpando a la oligarquía y el parlamento de ser los responsables de su fracaso administrativo, y, la indispensable necesidad de su continuidad al elegir a su candidato para el periodo 2026-2030, y mejorar la presencia en el Congreso.

De la arriesgada apuesta de la Consulta Popular son conscientes en la Casa de Nariño, como también tienen claridad de esa situación por el lado de la oposición, la más discreta y la más fanática. Se abre de esta manera, una coyuntura en disputa de la opinión y la movilización pública, con despliegue de asesores del mayor quilate y tecnologías de manipulación de conciencias; un despliegue de verdades y mentiras de todos los matices copará cada minuto de los próximos días, semanas y meses. Nos espera una aguda confrontación de la guerra mediática.

Como complemento de ello, los más diversos actores sociales se sumarán a este pulso, que podría hacer realidad, así sea por corto tiempo, la materialización de la necesaria democracia participativa, que el gobierno Petro debió propiciar, desde el 7 de agosto de 2022, pero que solo ha utilizado como mecanismo de presión en las negociaciones con los partidos tradicionales, y, que ahora utiliza como mecanismo de agitación social frente a las próximas elecciones.

Recuperar la conciencia que el Estado capitalista y sus formas de gobierno no regalan nada, sino que es el pueblo que conquista sus reivindicaciones en las luchas y la movilización, recupera la confianza del pueblo en su propia fuerza; el paro, la huelga, el bloqueo, el estallido social, con sus mandatos obligantes, harán reencontrar al pueblo en su capacidad insurgente contra el Estado y el capital.



Colombia, a su vez, sigue siendo el bastión militar por excelencia de Estados Unidos en la región.

Su papel de gendarme no ha cambiado pese al gobierno progresista. La articulación con la OTAN, la permanencia de Bases Militares y el anuncio de nuevas como la negociada en la isla Gorgona, el entrenamiento de fuerzas regionales y su rol en operaciones hemisféricas revelan su función estructural en la contención y vigilancia del continente. La Paz Total, en ese contexto, es la continuidad de la doctrina de Seguridad Nacional del Pentágono, aplicada como guerra contrainsurgente, que legaliza su aparato paramilitar y pretende colocar la rebelión armada como simple delincuencia

